



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Nota

Número:

Referencia: NOTA DEL MENSAJE N° 85/2023

A: LA SEÑORA PRESIDENTA DE LA HCDN (Cecilia MOREAU),

Con Copia A:

De mi mayor consideración:

SEÑORA PRESIDENTA:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. a fin de remitirle adjunto al presente el Original del Mensaje N° 85/ 2023 y Proyecto de Ley tendiente a aprobar la ENMIENDA AL PROTOCOLO DE MONTEVIDEO SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS DEL MERCOSUR, suscripta en la ciudad de Montevideo –REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY– el 6 de julio de 2022.

Sin otro particular saluda atte.



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Mensaje

Número:

Referencia: Mensaje: Ley - Aprueba la ENMIENDA AL PROTOCOLO DE MONTEVIDEO SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS DEL MERCOSUR

AL HONORABLE CONGRESO DE LA NACIÓN:

Tengo el agrado de dirigirme a Su Honorabilidad con el objeto de someter a su consideración un proyecto de ley tendiente a aprobar la ENMIENDA AL PROTOCOLO DE MONTEVIDEO SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS DEL MERCOSUR, suscripta en la ciudad de Montevideo –REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY– el 6 de julio de 2022.

El comercio de servicios entre los Estados Partes del MERCOSUR se rige por el PROTOCOLO DE MONTEVIDEO SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS DEL MERCOSUR, suscripto en la ciudad de Montevideo –REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY– el 15 de diciembre de 1997, que tiene como objetivo promover el libre comercio de servicios en el MERCOSUR. A ese efecto, el citado PROTOCOLO DE MONTEVIDEO consta de CUATRO (4) ANEXOS que establecen disposiciones específicas sectoriales y horizontales sobre los siguientes temas: "Servicios de Transporte Terrestre y por Agua", "El Movimiento de Personas Físicas Proveedoras de Servicios", "Servicios de Transporte Aéreo" y "Servicios Financieros".

En el año 2020 los Estados Partes consideraron que, atento al tiempo transcurrido, a la importancia creciente del comercio de servicios y los avances registrados en las negociaciones externas, resultaba necesario revisar las listas de compromisos específicos y también los ANEXOS al citado PROTOCOLO DE MONTEVIDEO SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS DEL MERCOSUR. Luego de un análisis llevado a cabo en el Subgrupo de Trabajo N° 17 "Servicios"(SGT N° 17), dependiente del Grupo Mercado Común se acordó elaborar TRES (3) nuevos ANEXOS sectoriales y horizontales, que fueron aprobados por la Decisión del CONSEJO DEL MERCADO COMÚN N° 19/21, adoptada el 5 de abril de 2022, como parte de una ENMIENDA AL PROTOCOLO DE MONTEVIDEO SOBRE EL COMERCIO DEL MERCOSUR: "Servicios Postales" (ANEXO I), "Servicios de Telecomunicaciones" (ANEXO II) y "Reglamentación Nacional" (ANEXO III).

En dicho sentido, el instrumento cuya aprobación se propone introduce en el ANEXO I "SERVICIOS

POSTALES” cambios en materia postal y de servicios de correos, actividades fundamentales y de alto valor social e impacto económico. Sus disposiciones importan una modernización normativa de la actividad postal, en particular en cuanto a la prevención de prácticas anticompetitivas, el servicio postal universal, el otorgamiento de concesiones y licencias, como así también en orden a la independencia de los organismos reguladores; esta actualización resulta necesaria para avanzar en la consolidación del Mercado Común en materia postal. Sus disposiciones no afectan a los servicios reservados para los operadores designados por cada Estado Parte.

Por otro lado, en el ANEXO II de la referida Enmienda denominada “SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES” se establecen condiciones mínimas uniformes para la regulación sectorial de los Estados Partes en temas tales como “Acceso y uso de los servicios de telecomunicaciones”, “Salvaguardias a la competencia”, “Interconexión”, “Servicio universal”, “Procedimientos de Licencias”, “Acceso a facilidades esenciales y recursos escasos” y “Portabilidad”, entre otros. Esta uniformidad permitirá contar con reglas claras para las empresas y operadores de los Estados Partes que estén interesados en invertir u operar en el bloque. Al respecto, cabe tener presente la importancia de los servicios de telecomunicaciones/TIC en el desarrollo transversal de otros sectores de la economía y la inclusión social.

Por último, el ANEXO III “REGLAMENTACIÓN NACIONAL” tiene como objetivo mitigar los efectos restrictivos sobre el comercio de servicios de las medidas relacionadas con los requisitos y procedimientos de concesión de licencias, los requisitos de calificación, las normas técnicas y otros procedimientos administrativos. De esta forma, se busca garantizar que los compromisos existentes en materia de “acceso al mercado” y el “trato nacional” otorgados a los prestadores de servicios de la región y consignados en las listas de compromisos específicos de los Estados Partes del MERCOSUR no se vean distorsionados por procedimientos administrativos deliberadamente opacos y complejos. Todo ello, sin perjuicio de que se reconoce el derecho de los Estados Partes de regular e introducir nuevas reglamentaciones sobre la prestación de servicios dentro de sus respectivos territorios con el fin de cumplir sus objetivos de política nacional. En la negociación de este Anexo se tuvieron en cuenta las disposiciones sobre reglamentación nacional negociadas en los Acuerdos MERCOSUR – Unión Europea, MERCOSUR – EFTA y MERCOSUR – Singapur. También se tomaron en cuenta los avances multilaterales alcanzados en el marco de la “Iniciativa Conjunta sobre la Reglamentación Nacional en el Ámbito de los Servicios”, de la cual nuestro país forma parte y que se aprobó en la ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO (OMC) el 2 de diciembre de 2021.

La oportuna entrada en vigor de la ENMIENDA AL PROTOCOLO DE MONTEVIDEO SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS DEL MERCOSUR contribuirá a ampliar la cobertura sectorial del referido PROTOCOLO DE MONTEVIDEO, haciendo un aporte significativo a la actualización y modernización de la normativa del bloque en materia de comercio de servicios, con la importancia que ello conlleva para el desarrollo económico de los Estados que formamos parte del MERCOSUR.

Saludo a Su Honorabilidad con mi mayor consideración.

Digitally signed by CAFIERO Santiago Andres
Date: 2023.06.08 10:02:13 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by ROSSI Agustin Oscar
Date: 2023.06.08 16:34:01 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by FERNÁNDEZ Alberto Ángel
Date: 2023.06.11 18:55:36 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2023.06.11 18:55:47 -03:00



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

Proyecto de ley

Número:

Referencia: Ley - Aprueba la ENMIENDA AL PROTOCOLO DE MONTEVIDEO SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS DEL MERCOSUR

EL SENADO Y CÁMARA DE DIPUTADOS
DE LA NACIÓN ARGENTINA, REUNIDOS EN CONGRESO, ...
SANCIONAN CON FUERZA DE

LEY:

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la ENMIENDA AL PROTOCOLO DE MONTEVIDEO SOBRE EL COMERCIO DE SERVICIOS DEL MERCOSUR, celebrada en la Ciudad de Montevideo -REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY- el 6 de julio de 2022, que consta de DOS (2) artículos y TRES (3) Anexos, que como ANEXO (IF-2022-122151334-APN-DTR#MRE) en los idiomas español y portugués forma parte de la presente ley.

ARTÍCULO 2°.- Comuníquese al PODER EJECUTIVO NACIONAL.

Digitally signed by FERNÁNDEZ Alberto Ángel
Date: 2023.06.11 18:55:08 ART
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2023.06.11 18:55:20 -03:00



**ENMIENDA AL PROTOCOLO DE MONTEVIDEO
SOBRE
EL COMERCIO DE SERVICIOS DEL MERCOSUR**

La República Argentina, la República Federativa del Brasil, la República del Paraguay y la República Oriental del Uruguay, Estados Partes del MERCOSUR;

TENIENDO EN CUENTA el Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del Mercado Común del Sur, suscrito entre los Estados Partes del MERCOSUR en Montevideo, República Oriental del Uruguay, el 15 de diciembre de 1997;

CONSIDERANDO:

Que el artículo XIX del Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del MERCOSUR establece que los Estados Partes llevarán a cabo sucesivas rondas de negociaciones anuales con el objetivo de completar el Programa de Liberalización del Comercio de Servicios;

Que, de conformidad con los artículos XXI y XXII del Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del MERCOSUR, el Grupo Mercado Común convocó la realización de la VIII Ronda de Negociaciones de Compromisos Específicos en Materia de Servicios;

Que resulta necesario actualizar al Protocolo de Montevideo sobre Comercio de Servicios del MERCOSUR con la incorporación de nuevos Anexos sectoriales y horizontales.

ACUERDAN:

ARTÍCULO I

Incorporar al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del MERCOSUR los Anexos sobre Servicios Postales, Servicios de Telecomunicaciones y Reglamentación Nacional que constan como Anexos I, II y III de la presente Enmienda, respectivamente.

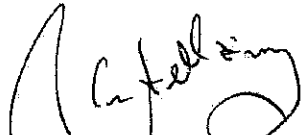
ARTÍCULO II

1. La presente Enmienda entrará en vigor treinta (30) días después del depósito del instrumento de ratificación por el tercer Estado Parte del MERCOSUR. Para el Estado Parte que la ratifique con posterioridad, la presente Enmienda entrará en vigor treinta (30) días después de la fecha en que deposite su respectivo instrumento de ratificación.

2. La República del Paraguay será depositaria de la presente Enmienda y de los respectivos instrumentos de ratificación, debiendo notificar a los Estados Partes la fecha de los depósitos de esos instrumentos y de la entrada en vigor de la presente Enmienda, así como enviarles copia debidamente autenticada de la misma.



Hecho en la ciudad de Montevideo, República Oriental del Uruguay, a los 6 días del mes de julio de 2022, en un original en los idiomas español y portugués, siendo ambos textos igualmente auténticos.



POR LA REPÚBLICA ARGENTINA



POR LA REPÚBLICA FEDERATIVA DEL BRASIL



POR LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY



POR LA REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY



ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN LA DIRECCION DE TRATADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES


Carlos Ruckelshausen
Director de Tratados

ANEXO I

SERVICIOS POSTALES

ARTÍCULO 1 ALCANCE Y DEFINICIONES

1. El presente Anexo establece principios del marco reglamentario de los servicios postales respecto del cual los Estados Partes han contraído compromisos específicos de conformidad con este Protocolo.
2. Nada de lo dispuesto en este Anexo implica una exigencia para que un Estado Parte liberalice los servicios reservados a uno o varios operadores designados, de acuerdo a lo indicado en su lista de compromisos.
3. A los efectos del presente Anexo se adoptan las siguientes definiciones:
 - a) "autoridad reguladora": organismo u organismos independientes encargados de la regulación de los servicios postales mencionados en el presente Anexo;
 - b) "envío postal": todo envío que es transportado por un prestador de servicios postales, público o privado, y que puede incluir artículos como cartas, paquetes, periódicos, catálogos, entre otros;
 - c) "licencia": cualquier forma de registro, autorización o permiso, estableciendo derechos y obligaciones específicos del sector postal, concedida a un prestador individual por una autoridad reguladora, o cualquier otro organismo competente, que sea requerida antes de prestar un servicio determinado;
 - d) "requisitos esenciales": razones generales no económicas para imponer condiciones a la prestación de servicios postales. Estas razones pueden incluir la confidencialidad de la correspondencia, la seguridad de la red en lo que respecta al transporte de mercancías peligrosas, la protección de datos, la protección del medio ambiente y la planificación regional;
 - e) "servicio postal": servicios relacionados con la recogida, clasificación, transporte y entrega de envíos postales a destinos nacionales o extranjeros, de carácter prioritario, no prioritario, urgente, expreso, o de otro tipo, realizados por cualquier operador, ya sea público o privado¹;
 - f) "servicio postal universal": prestación regular y permanente de un servicio postal de calidad especificada en todos los puntos del territorio de un Estado Parte a precios asequibles para todos los usuarios. Su alcance e implementación son decididos por cada Estado Parte.

¹ Los servicios postales cubren CCP 7511 y CCP 7512.



ARTÍCULO 2 PREVENCIÓN DE PRÁCTICAS ANTICOMPETITIVAS EN EL SECTOR POSTAL

Cada Estado Parte se asegurará de que un prestador de servicios postales sujeto a una obligación de servicio universal o un monopolio postal, no incurran en prácticas anticompetitivas, tales como:

- a) utilizar los ingresos derivados de la prestación de dicho servicio para subvencionar la prestación de un servicio postal expreso o de cualquier servicio postal no universal, y
- b) diferenciar entre clientes, tales como empresas, remitentes de gran volumen o consolidadores, con respecto a tarifas u otros términos y condiciones para la prestación de un servicio sujeto a una obligación de servicio universal o un monopolio postal, siempre y cuando dicha diferenciación no se base en criterios objetivos o imparciales.

ARTÍCULO 3 SERVICIO POSTAL UNIVERSAL

Cualquier Estado Parte tiene derecho a definir el tipo de obligación de servicio postal universal que desea mantener y puede adoptar las medidas necesarias para salvaguardar la implementación, el desarrollo y el mantenimiento del servicio postal universal. Tales medidas y obligaciones no se considerarán anticompetitivas *per se*, siempre que se apliquen de manera transparente, no discriminatoria y proporcionada.

ARTÍCULO 4 LICENCIAS PARA LA PROVISIÓN DE SERVICIOS POSTALES

1. Los Estados Partes podrán requerir una licencia para la provisión de servicios postales. Dicha licencia se otorgará de conformidad con la legislación de cada Estado Parte, la cual procurará establecer un procedimiento de autorización sencillo.
2. Una licencia podrá exigir el cumplimiento de los requisitos esenciales, incluyendo las normas de calidad y el respeto de los derechos exclusivos y especiales de los operadores designados de servicios reservados o de los servicios postales universales.
3. Cuando se requiera de una licencia para la provisión de servicios postales:
 - a) los Estados Partes deberán hacer público de una forma de fácil acceso:
 - i. los derechos y obligaciones resultantes de dicha licencia;
 - ii. los criterios, términos y condiciones para la concesión de licencias; y

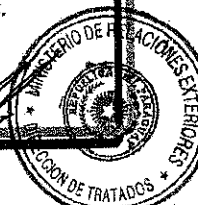


- iii. en la medida de lo posible, el período de tiempo normalmente necesario para tomar una decisión relativa a una solicitud de licencia.
 - b) los procedimientos de concesión de una licencia deberán ser transparentes, no discriminatorios, proporcionados y basados en criterios objetivos;
 - c) los costos en que puedan incurrir los solicitantes a raíz de su solicitud deberán ser razonables y no restringir por sí mismos la provisión del servicio.²
4. El estado de una solicitud de licencia y las razones de su denegación se deberán comunicar al solicitante. El procedimiento de apelación a través de un organismo nacional independiente deberá ser puesto a disposición de acuerdo con la regulación de cada Estado Parte. Dicho procedimiento deberá ser transparente, no discriminatorio y deberá estar basado en criterios objetivos.

ARTÍCULO 5 INDEPENDENCIA DE LOS ORGANISMOS REGULADORES

Los Estados Partes podrán designar una autoridad reguladora, específica o no para el sector. El organismo o los organismos reguladores de servicios postales deben estar legalmente separados de los prestadores de servicios postales y no tendrán que rendir cuentas ante ningún prestador de servicios. Las decisiones y los procedimientos utilizados por los organismos reguladores deben ser imparciales con respecto a todos los participantes en el mercado.

² Las tasas de concesión de licencias no incluyen pagos por subasta, licitación u otros medios no discriminatorios de concesión, ni contribuciones obligatorias a la prestación de servicios universales.



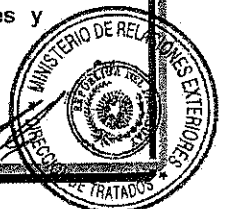
ANEXO II
SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

ARTÍCULO 1
ALCANCE Y DEFINICIONES

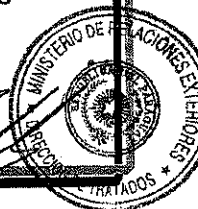
1. El presente Anexo se aplica a las medidas de los Estados Partes que afectan al comercio de servicios de telecomunicaciones³. No se aplicará a las medidas de un Estado Parte que afecten al suministro de contenidos transportados por telecomunicaciones, incluida la radiodifusión o la distribución por cable de programas de radio o televisión.⁴
2. Nada de lo dispuesto en el presente Anexo se interpretará de manera a:
 - a) exigir a un Estado Parte que autorice a un prestador de servicios de cualquier otro Estado Parte a establecer, construir, adquirir, arrendar, operar o suministrar redes o servicios de transporte de telecomunicaciones, salvo lo dispuesto en su Lista de Compromisos Específicos; o
 - b) exigir a un Estado Parte que obligue a los prestadores de servicios bajo sus leyes y reglamentaciones nacionales, a establecer, construir, adquirir, arrendar, operar o suministrar redes o servicios de transporte de telecomunicaciones no ofrecidos al público en general.
3. A los efectos del presente Anexo se adoptan las siguientes definiciones:
 - a) "telecomunicaciones": transmisión y recepción de señales por cualquier medio electromagnético;
 - b) "autoridad reguladora": organismo u organismos encargados de cualquiera de las tareas reglamentarias asignadas en relación con las cuestiones mencionadas en el presente Anexo;
 - c) "prestador de servicios": persona a la cual se le ha otorgado una licencia para proveer servicios de telecomunicaciones;

³ A los efectos del presente Anexo, "comercio de servicios de telecomunicaciones" se entiende de conformidad con la definición contenida en el apartado 2) del artículo II del Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios en el MERCOSUR.

⁴ A los efectos del presente Anexo, "radiodifusión" se define de acuerdo a las leyes y reglamentos nacionales de cada Estado Parte.



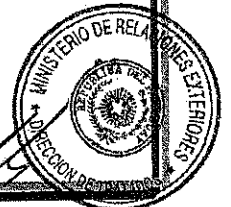
- d) "prestador con poder significativo de mercado": prestador de servicios que tiene la capacidad de afectar materialmente las condiciones de participación con relación al precio y la oferta en los mercados relevantes para las redes o servicios públicos de telecomunicaciones como resultado de su posición en el mercado;
- e) "red pública de telecomunicaciones": infraestructura de telecomunicaciones que permite la prestación del servicio público de telecomunicaciones entre puntos de terminación de red definidos;
- f) "servicio público de telecomunicaciones": cualquier servicio de telecomunicaciones que un Estado Parte prescriba, explícitamente o de hecho, que se ofrezca al público en general;
- g) "interconexión": conexión entre prestadores que proveen redes o servicios de telecomunicaciones de manera tal de permitir que los usuarios de un prestador se comuniquen con los usuarios de otro prestador y accedan a los servicios suministrados por otro prestador;
- h) "licencia": cualquier forma de autorización otorgada por una autoridad reguladora que sea necesaria para la prestación del servicio de telecomunicaciones;
- i) "circuitos arrendados": instalaciones de telecomunicaciones entre dos o más puntos designados que se reservan para el uso o la disponibilidad específica a un cliente en particular u otros usuarios a elección del cliente;
- j) "puntos de interconexión": puntos físicos ubicados en la frontera de una red, donde se encuentran los elementos de transmisión de los dos prestadores en una interconexión, que permiten unir a los dos nodos de interconexión involucrados. En estos puntos, que pueden estar en cualquier parte del camino entre los nodos, se establecen los límites de la responsabilidad sobre medios físicos de cada uno de los prestadores;
- k) "puntos de terminación de red": demarcación final de la red pública de telecomunicaciones en las instalaciones de los prestadores de servicios;
- l) "no discriminatorio": trato no menos favorable que el concedido a cualquier otro usuario o prestador de redes o servicios públicos de telecomunicaciones similares en circunstancias similares;
- m) "portabilidad numérica": capacidad de los usuarios de servicios públicos de telecomunicaciones para conservar, en la misma área de numeración, los mismos números de teléfono al cambiar entre la misma categoría de prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones;



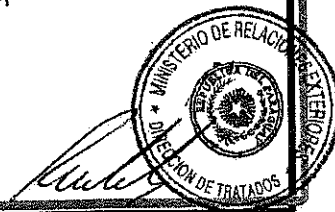
- n) "persona": persona física o jurídica;
- o) "usuario": consumidor final o suscriptor de servicios de telecomunicaciones;
- p) "servicio universal": servicio o conjunto de servicios de telecomunicaciones que deben estar disponibles para todos los usuarios en el territorio de un Estado Parte en condiciones de calidad especificadas, asequibilidad y a precios justos y razonables, independientemente de su ubicación geográfica. Su alcance e implementación serán decididos por cada Estado Parte;
- q) "facilidades esenciales": instalaciones de una red o servicio público de telecomunicaciones que, de acuerdo con las respectivas normas nacionales, son:
 - i. suministrados exclusiva o predominantemente por un solo o un número limitado de prestadores de servicios; y
 - ii. recursos de una red o servicio de telecomunicaciones que no puedan ser sustituidos de manera económica o técnicamente factible para el suministro de un servicio.
- r) "comunicaciones intraempresariales": aquellas a través de las cuales una empresa se comunica dentro de la misma o con o entre sus subsidiarias, sucursales y filiales. No incluyen un servicio comercial o no comercial que se suministre a una empresa que no es una subsidiaria, sucursal o filial, o que se ofrece a un cliente o cliente potencial. A los efectos de esta definición, las "subsidiarias", las "sucursales" y, en su caso, las "filiales" son las definidas por cada Estado Parte en sus leyes nacionales.

ARTÍCULO 2
ACCESO Y USO DE REDES O SERVICIOS PÚBLICOS DE TELECOMUNICACIONES

1. Cada Estado Parte se asegurará, de conformidad con su normativa interna, que a una persona de otro Estado Parte se le conceda el uso de redes o servicios públicos de telecomunicaciones, incluidos los circuitos arrendados, ofrecidos en su territorio o a través de sus fronteras, en términos y condiciones razonables y no discriminatorios.
2. A tal fin, cada Estado Parte se asegurará, de conformidad con los párrafos 6 y 7, de que una persona de otro Estado Parte esté autorizada a:
 - a) comprar, o arrendar, y conectar terminales u otros equipos que interactúen con una red pública de telecomunicaciones;



- b) conectar circuitos arrendados o de su propiedad con una red pública de telecomunicaciones o servicio de telecomunicaciones de ese Estado Parte o con circuitos arrendados o de propiedad de otra persona;
 - c) utilizar un protocolo operativo de su elección entre los protocolos disponibles.
3. Cada Estado Parte se asegurará, de conformidad con sus reglamentos nacionales, de que un usuario del otro Estado Parte pueda utilizar una red o servicio público de telecomunicaciones para el movimiento de información en su territorio o a través de sus fronteras, incluso para las comunicaciones intraempresariales, y para el acceso a la información contenida en una base de datos o almacenada de otra manera en forma legible por máquina en el territorio de cualquiera de los Estados Partes.
4. De conformidad con el Artículo XIII "Excepciones generales" del Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del MERCOSUR, un Estado Parte podrá tomar las medidas necesarias para:
- a) garantizar la seguridad y confidencialidad de los mensajes; o
 - b) proteger la privacidad de los datos personales de los usuarios de los servicios públicos de telecomunicaciones.
5. Una medida adoptada en virtud del párrafo 4 no podrá aplicarse de manera que constituya un medio de discriminación arbitrario o injustificable o una restricción encubierta al comercio.
6. Cada Estado Parte se asegurará de que no se imponga ninguna condición al acceso y uso de una red o servicio público de telecomunicaciones que no sea necesario para:
- a) salvaguardar las responsabilidades de servicio público de los prestadores de un servicio público de telecomunicaciones, en particular su capacidad para poner su servicio a disposición del público en general;
 - b) proteger la integridad técnica de una red o servicio público de telecomunicaciones.
7. Siempre que cumplan los criterios establecidos en el párrafo 6, las condiciones de acceso y uso de una red o servicio público de telecomunicaciones podrán incluir:
- a) una restricción a la reventa o al uso compartido de ese servicio;
 - b) requisitos de utilizar una interfaz técnica especificada, incluido un protocolo de interfaz, para la conexión con esa red o servicio;



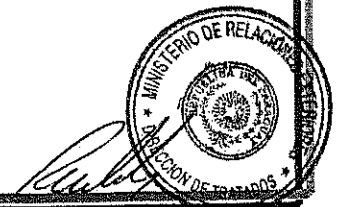
- c) un requisito, cuando sea necesario, para la interoperabilidad de ese servicio;
- d) la evaluación de la conformidad de la terminal u otro equipo que interactúe con la red y los requisitos técnicos relativos a la conexión de dicho equipo a la red;
- e) una restricción a la conexión de circuitos propios o arrendados con esa red o servicio o de circuitos propios o arrendados con otra empresa; y
- f) notificación, registro y concesión de licencias.

ARTÍCULO 3 SALVAGUARDIAS DE LA COMPETENCIA

1. Cada Estado Parte deberá mantener las medidas apropiadas con el fin de impedir que los prestadores, individualmente o en conjunto, participen o continúen con prácticas anticompetitivas.
2. Las prácticas anticompetitivas a que se refiere el párrafo 1 incluirán, en particular:
 - a) realizar actividades anticompetitivas de subsidios cruzados;
 - b) utilizar información obtenida de competidores con resultados anticompetitivos; y
 - c) no poner oportunamente a disposición de los demás prestadores de servicios la información técnica sobre las facilidades esenciales y la información comercialmente pertinente que éstos necesiten para suministrar servicios.

ARTÍCULO 4 INTERCONEXIÓN

1. Este artículo se aplica a la vinculación con prestadores que proporcionan redes o servicios públicos de telecomunicaciones para permitir que los usuarios de un prestador se comuniquen con los usuarios de otro prestador y accedan a los servicios suministrados por otro prestador, cuando se asuman compromisos específicos.
2. Todo prestador autorizado para prestar servicios de telecomunicaciones tendrá derecho a negociar la interconexión con otros prestadores de redes y servicios de telecomunicaciones. En principio, la interconexión debería acordarse sobre la base de una negociación comercial entre los prestadores interesados.



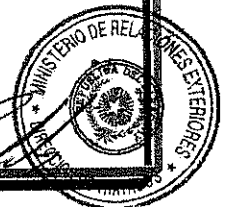
3. Cuando la reglamentación nacional exija que los prestadores se interconecten, dicha interconexión se proporcionará de manera oportuna, en términos y condiciones (incluidas las normas y especificaciones técnicas) que sean transparentes, razonables, teniendo en cuenta la viabilidad económica, y suficientemente detallada y desagregada para que el prestador no tenga que pagar por componentes o instalaciones de la red que no requiera para los servicios a ser suministrados.
4. Dicha interconexión se proporcionará en puntos técnicamente factibles además de los puntos de interconexión ofrecidos a la mayoría de los oferentes, sujeto a tarifas razonables y a una evaluación por parte de la autoridad reguladora cuando corresponda.
5. Cada Estado Parte se asegurará de que todo prestador, que de acuerdo con la reglamentación nacional esté obligado a proporcionar interconexión, haga público los procedimientos aplicables para las negociaciones de interconexión.

ARTÍCULO 5 SERVICIO UNIVERSAL

1. Cada Estado Parte tiene derecho a definir la obligación de servicio universal que desea adoptar o mantener.
2. Cada Estado Parte deberá administrar cualquier obligación de servicio universal que adopte o mantenga de manera transparente, objetiva, no discriminatoria y competitivamente neutral.

ARTÍCULO 6 LICENCIAS PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

1. La licencia se concederá, siempre que sea posible, mediante un procedimiento simplificado.
2. Los términos y condiciones para la atribución de números y frecuencias deberán estar disponibles públicamente.
3. Cuando se requiera una licencia:
 - a) todos los criterios de otorgamiento deberán estar disponibles públicamente;
 - b) se deberá poner a disposición del público el período de tiempo razonable que normalmente se requiere para tomar una decisión sobre una solicitud después de la presentación de una solicitud completa;
 - c) las razones de la denegación se deberán comunicar por escrito al solicitante que lo requiera;



- d) el solicitante deberá poder recurrir a un organismo nacional de apelación en el caso de que una licencia le haya sido denegada.

ARTÍCULO 7 AUTORIDAD REGULADORA

1. La autoridad reguladora para los servicios de telecomunicaciones de cada Estado Parte, deberá ser independiente y no deberá rendir cuentas a ningún prestador de servicios de telecomunicaciones.
2. Cada Estado Parte se asegurará de que las decisiones y los procedimientos utilizados por su autoridad reguladora sean imparciales con respecto a todos los participantes en el mercado.
3. Cada Estado Parte se asegurará de que los prestadores de servicios de otro Estado Parte afectados por la determinación o decisión de la autoridad reguladora puedan solicitar a esa autoridad que reconsidere esa determinación o decisión. Un Estado Parte podrá limitar las circunstancias bajo las cuales la reconsideración está disponible, de acuerdo con sus leyes y regulaciones.
4. Cada Estado Parte se asegurará de que los prestadores de servicios de otro Estado Parte afectados por una decisión de la autoridad reguladora del Estado Parte tengan el recurso de apelar ante un órgano administrativo independiente o un tribunal, de conformidad con las leyes y reglamentos nacionales de ese Estado Parte.

ARTÍCULO 8 OBSERVANCIA

Cada Estado Parte deberá mantener los procedimientos adecuados y la autoridad para hacer cumplir sus medidas internas con relación a las obligaciones del presente Anexo. Dichos procedimientos incluirán la posibilidad de imponer sanciones apropiadas, las cuales podrían ser, entre otras, sanciones financieras, acciones correctivas, o la modificación, suspensión o revocación de licencias.

ARTÍCULO 9 RECURSOS ESCASOS

Cada Estado Parte deberá llevar a cabo sus procedimientos para otorgar derechos de uso de recursos escasos, incluyendo frecuencias, números y derecho de paso, de manera objetiva, oportuna, transparente y no discriminatoria. Cada Estado Parte deberá poner a disposición del público el estado actual de las bandas de frecuencia atribuidas, pero no se requiere una identificación detallada de las frecuencias para usos gubernamentales específicos.



ARTÍCULO 10 ACCESO A FACILIDADES ESENCIALES

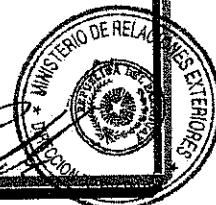
Cada Estado Parte deberá garantizar que los prestadores con poder significativo de mercado en su territorio otorguen acceso a las facilidades esenciales a otros prestadores de servicios o redes de telecomunicaciones, en términos y condiciones razonables y no discriminatorios (incluso en relación con tarifas, normas técnicas, especificaciones, calidad y mantenimiento).

ARTÍCULO 11 PORTABILIDAD NUMÉRICA

Cada Estado Parte se asegurará de que los prestadores de servicios públicos de telecomunicaciones en su territorio proporcionen portabilidad numérica sin menoscabo de la calidad y la fiabilidad, de manera oportuna, sobre la base de términos y condiciones razonables y no discriminatorios, para aquellos servicios públicos de telecomunicaciones en los cuales su reglamentación interna lo prevea.

ARTÍCULO 12 SOLUCIÓN DE DISPUTAS

1. Cada Estado Parte se asegurará de que un prestador de servicios tenga la posibilidad de recurrir oportunamente a su autoridad reguladora para resolver, dentro de un periodo de tiempo razonable, disputas con respecto a una medida que se relacione con las cuestiones previstas en el presente Anexo y que, conforme a la legislación nacional del Estado Parte, estén dentro de la jurisdicción de la autoridad reguladora.
2. Cuando la disputa sea sobre la negociación de un acuerdo de interconexión, cada Estado Parte se asegurará de que los prestadores tengan la posibilidad de recurrir a la autoridad reguladora para que resuelva sobre términos, condiciones y tarifas apropiadas para la interconexión dentro de un periodo de tiempo razonable. La autoridad reguladora podrá recurrir a procedimientos especiales de conciliación.
3. Si la disputa persistiera, la autoridad reguladora deberá fijar las condiciones para la interconexión de conformidad con los principios que rigen el sector de que se trate, así como los establecidos en el presente Anexo.
4. Cuando una disputa se refiera a la prestación transfronteriza de servicios, las autoridades reguladoras nacionales interesadas coordinarán sus esfuerzos para lograr su solución.



ARTÍCULO 13 TRANSPARENCIA

Adicionalmente a lo dispuesto en el Artículo VIII "Transparencia" del Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del MERCOSUR, y como complemento de las demás disposiciones del presente Anexo relativas a la publicación de información, cada Estado Parte deberá poner a disposición del público:

- a) el estado actual de las bandas de frecuencias atribuidas. No se requiere una identificación detallada de las frecuencias atribuidas para un uso gubernamental específico;
- b) sus medidas relativas a las redes o servicios públicos de telecomunicaciones, incluidos:
 - i. los procedimientos pertinentes de su autoridad reguladora, incluidos los relacionados con la interconexión y la concesión de licencias;
 - ii. los criterios de licencias, sus términos y condiciones y el período de tiempo normalmente necesario para llegar a una decisión sobre una solicitud al respecto;
 - iii. medidas relativas a las tarifas y otros términos y condiciones de servicio;
 - iv. medidas relativas a las condiciones de conexión de terminales u otros equipos a la red pública de telecomunicaciones;
 - v. medidas relativas a los requisitos de notificación, permiso, registro o licencia.



ANEXO III

REGLAMENTACIÓN NACIONAL

ARTÍCULO 1
ALCANCE DE APLICACIÓN

1. El presente Anexo se aplica sólo a los sectores para los cuales un Estado Parte haya asumido compromisos específicos de conformidad con el artículo VII del Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del MERCOSUR, y en la medida en que se apliquen estos compromisos específicos.
2. Los Estados Partes reconocen el derecho a regular e introducir nuevas reglamentaciones sobre la prestación de servicios dentro de sus respectivos territorios a fin de cumplir sus objetivos de política nacional.
3. Cada Estado Parte se asegurará de que todas las medidas de aplicación general que afecten al comercio de servicios se administren de manera razonable, objetiva e imparcial.

ARTÍCULO 2
DESARROLLO DE REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN DE
LICENCIAS Y TÍTULOS DE APTITUD

1. Cuando un Estado Parte adopte o mantenga una medida relacionada con los requisitos y procedimientos de concesión de licencias, o los requisitos y procedimientos de títulos de aptitud, relacionados con el comercio de servicios, el Estado Parte, con respecto a esa medida, se asegurará de que:
 - a) los requisitos o procedimientos se basen en criterios que sean:
 - i. objetivos y transparentes, como la competencia y la capacidad de suministrar un servicio;
 - ii. establecidos con antelación y de acceso público.
 - b) los procedimientos sean razonables, simples y que no constituyan por sí mismos una restricción indebida al cumplimiento de un requisito; y
 - c) los procedimientos en materia de licencias no constituyan por sí mismos una restricción a la prestación del servicio.
2. Cuando un Estado Parte adopte o proponga reglamentos relacionados con los requisitos de licencia, los requisitos de títulos de aptitud, los procedimientos de licencia o los procedimientos de títulos de aptitud, deberá procurar, en la medida que sea factible y de manera compatible con las leyes y regulaciones nacionales de los Estados Partes, llevar a cabo una evaluación de impacto reglamentario.

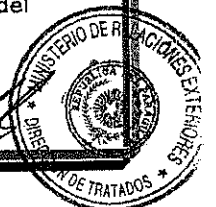


ARTÍCULO 3
ADMINISTRACIÓN DE LOS REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE CONCESIÓN DE LICENCIAS Y TÍTULOS DE APTITUD

1. Cada Estado Parte se asegurará de que los procedimientos de concesión de licencias, o procedimientos de títulos de aptitud utilizados por la autoridad competente y las decisiones de la autoridad competente en el proceso de autorización, sean imparciales con respecto a todos los solicitantes. La autoridad competente debe tomar sus decisiones de manera independiente y, en particular, no deberá responder a los intereses de ninguna persona que preste el servicio.
2. En la medida en que sea factible, cada Estado Parte deberá evitar que un solicitante se dirija a más de una autoridad competente para cada solicitud de autorización⁵.
3. Cuando se requiera autorización para el suministro de un servicio, las autoridades competentes de un Estado Parte deben:
 - a) en la medida en que sea factible, permitir que el solicitante presente una solicitud en cualquier momento⁶;
 - b) permitir un plazo prudencial para la presentación de una solicitud cuando existan plazos específicos para las solicitudes;
 - c) iniciar el procesamiento de una solicitud sin demora indebida;
 - d) garantizar que la tramitación de una solicitud de autorización, incluyendo una decisión definitiva, sea concluida en un plazo razonable a partir de la presentación de la solicitud completa;
 - e) a petición de un solicitante, proporcionar información sobre el estado de la solicitud a la mayor brevedad posible;
 - f) cuando se requieran exámenes, programarlos a intervalos razonablemente frecuentes; y proporcionar un plazo prudencial para los interesados en la toma del examen;
 - g) en la medida de lo posible, aceptar solicitudes en formato electrónico en condiciones similares de autenticidad que las presentaciones en papel;
 - h) aceptar copias autenticadas en lugar de documentos originales, a menos que se requieran documentos originales para proteger la integridad del proceso de autorización;

⁵ Para mayor certeza, un Estado Parte puede requerir múltiples solicitudes de autorización cuando un servicio está dentro de la jurisdicción de múltiples autoridades competentes.

⁶ En el caso de los servicios profesionales, los Estados Partes se asegurarán de que existan procedimientos establecidos a nivel nacional para evaluar la competencia de los profesionales del otro Estado Parte.



- i) garantizar que las tasas de autorización⁷ cobradas por la autoridad competente cumplan cada uno de los siguientes criterios:
 - i. sean razonables y, en la medida de lo posible, proporcionales al costo de los procedimientos de autorización de que se trate;
 - ii. sean transparentes; y
 - iii. no restrinjan por sí mismas el suministro de un servicio.
4. Cada Estado Parte deberá asegurarse de que se conceda una autorización tan pronto como la autoridad competente determine que se han cumplido las condiciones para la misma y, una vez concedida, que la autorización entre en vigor sin demora indebida, de conformidad con los términos y condiciones especificados en dicha autorización.
5. Si una solicitud se considera incompleta, la autoridad competente de un Estado Parte deberá informar al solicitante dentro de un plazo razonable y, a petición del solicitante, deberá identificar la información adicional necesaria para completar la solicitud. La autoridad competente deberá brindar al solicitante la oportunidad de corregir las deficiencias.
6. Si la autoridad competente de un Estado Parte rechaza una solicitud, deberá informar al solicitante, en la medida de lo posible, dentro de un período de tiempo razonable. A pedido del solicitante, la autoridad competente del Estado Parte deberá informar también, en la medida en que sea factible, las razones por las que se rechazó la solicitud y el plazo para la presentación de un recurso o revisión contra la decisión. Se debe permitir que un solicitante, dentro de plazos razonables, vuelva a presentar una solicitud.

ARTÍCULO 4 REVISIÓN DE LAS DECISIONES ADMINISTRATIVAS

Cada Estado Parte deberá mantener o establecer tribunales o procedimientos judiciales, arbitrales o administrativos que proporcionen, a solicitud de un prestador de servicios de un Estado Parte, la pronta revisión de las decisiones administrativas que afecten al comercio de servicios y, cuando esté justificado, la aplicación de soluciones apropiadas. Cuando tales procedimientos no sean independientes del organismo encargado de la decisión administrativa en cuestión, cada Estado Parte deberá asegurar que los procedimientos permitan una revisión objetiva e imparcial.

⁷Las tasas de autorización no incluyen pagos por subasta, uso de recursos naturales, regalías, licitaciones u otros medios no discriminatorios para otorgar concesiones o contribuciones obligatorias para brindar un servicio universal.



**ARTÍCULO 5
TRANSPARENCIA**

Cuando un Estado Parte exija autorización para la prestación de un servicio deberá proporcionar la información necesaria para cumplir con los requisitos y procedimientos para obtener, mantener, modificar y renovar dicha autorización. La mencionada información deberá incluir, entre otros, los siguientes ítems, cuando existan:

- a) tasas;
- b) datos de contacto de las autoridades competentes pertinentes;
- c) procedimientos de apelación o revisión de las decisiones relativas a las solicitudes;
- d) procedimientos para monitorear o hacer cumplir los términos y condiciones de las licencias o títulos de aptitud;
- e) oportunidades de participación del público, por ejemplo, a través de audiencias o comentarios;
- f) plazos indicativos para la tramitación de una solicitud; y
- g) requisitos y procedimientos.



**EMENDA AO PROTOCOLO DE MONTEVIDÉU SOBRE O COMÉRCIO
DE SERVIÇOS DO MERCOSUL**

A República Argentina, a República Federativa do Brasil, a República do Paraguai e a República Oriental do Uruguai, estados partes do MERCOSUL;

TENDO EM VISTA o Protocolo de Montevidéu sobre o Comércio de Serviços do Mercado Comum do Sul, assinado entre os estados partes do MERCOSUL em Montevidéu, República Oriental do Uruguai, em 15 de dezembro de 1997;

CONSIDERANDO:

Que o artigo XIX do Protocolo de Montevidéu sobre o Comércio de Serviços do MERCOSUL estabelece que os estados partes realizarão sucessivas rodadas de negociações anuais com o objetivo de completar o Programa de Liberalização do Comércio de Serviços;

Que, em conformidade com os artigos XXI e XXII do Protocolo de Montevidéu sobre o Comércio de Serviços do MERCOSUL, o Grupo Mercado Comum convocou a realização da VIII Rodada de Negociações de Compromissos Específicos em Matéria de Serviços;

Que é necessário atualizar o Protocolo de Montevidéu sobre o Comércio de Serviços do MERCOSUL com a incorporação de novos anexos setoriais e horizontais.

ACORDAM:

ARTIGO I

Incorporar ao Protocolo de Montevidéu sobre o Comércio de Serviços do MERCOSUL os Anexos sobre Serviços Postais, Serviços de Telecomunicações e Regulamentação Doméstica que constam como Anexos I, II e III da presente Emenda, respectivamente.

ARTIGO II

1. A presente Emenda entrará em vigor trinta (30) dias após a data do depósito do instrumento de ratificação pelo terceiro estado parte do MERCOSUL. Para o estado parte que a ratifique posteriormente, a presente Emenda entrará em vigor trinta (30) dias após a data em que depositar seu respectivo instrumento de ratificação.

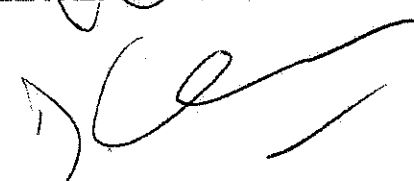
2. A República do Paraguai será depositária da presente Emenda e dos respectivos instrumentos de ratificação, devendo notificar aos estados partes a data dos depósitos desses instrumentos e da entrada em vigor da presente Emenda, assim como enviar-lhes cópia devidamente autenticada da mesma.

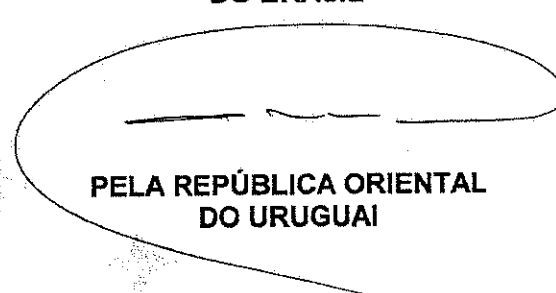


Feito na cidade de Montevideu, República Oriental do Uruguai, aos 6 dias do mês de julho de 2022, em um original, nos idiomas português e espanhol, sendo ambos os textos igualmente autênticos.


PELA REPÚBLICA ARGENTINA


PELA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL


PELA REPÚBLICA DO PARAGUAI


PELA REPÚBLICA ORIENTAL DO URUGUAI



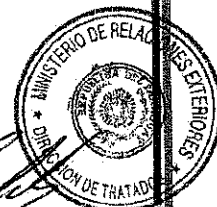
ES COPIA FIEL DEL ORIGINAL QUE OBRA EN LA DIRECCION DE TRATADOS DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES


Carlos Ruckelshausen
Director de Tratados

ANEXO I
SERVIÇOS POSTAIS
ARTIGO 1º
ESCOPO E DEFINIÇÕES

1. O presente Anexo estabelece princípios do marco regulatório em Serviços Postais a respeito do qual os estados partes assumiram compromissos específicos, em conformidade com este Protocolo.
2. Nada do disposto neste Anexo implica uma exigência para que um estado parte liberalize os serviços reservados a um ou vários operadores designados, de acordo com o indicado em sua lista de compromissos.
3. Para os fins do presente Anexo, adotam-se as seguintes definições:
 - a) "autoridade reguladora": organismo ou organismos independentes encarregados da regulação dos Serviços Postais mencionados no presente Anexo;
 - b) "licença": qualquer forma de registro, autorização ou licença, estabelecendo direitos e obrigações específicos do setor postal, concedida a um prestador individual por uma autoridade reguladora ou qualquer outro organismo competente, que seja requerida antes de prestar um serviço determinado;
 - c) "remessa postal": toda remessa que é transportada por um prestador de serviços postais, público ou privado, e que pode incluir artigos como cartas, pacotes, jornais, catálogos, entre outros;
 - d) "requisitos essenciais": razões gerais não econômicas para impor condições à prestação de serviços postais. Essas razões podem incluir a confidencialidade da correspondência, a segurança da rede no que tange ao transporte de mercadorias perigosas, a proteção de dados, a proteção do meio ambiente e o planejamento regional;
 - e) "serviço postal": serviços relacionados com coleta, classificação, transporte e entrega de remessas postais, para destinos nacionais ou estrangeiros, de caráter prioritário ou não prioritário, urgente, expresso ou de outro tipo, realizados por qualquer operador, seja público ou privado¹;
 - f) "serviço postal universal": prestação regular e permanente de um serviço postal de qualidade especificada, em todos os pontos do território de um estado parte, a preços acessíveis para todos os usuários. Seu escopo e implementação são decididos por cada estado parte.

¹ Os Serviços Postais cobrem CPC 7511 e CPC 7512.



ARTIGO 2º
PREVENÇÃO DE PRÁTICAS ANTICOMPETITIVAS NO SETOR POSTAL

Cada estado parte assegurará que um prestador de Serviços Postais sujeito a uma obrigação de um serviço universal ou um monopólio postal não incorram em práticas anticompetitivas, tais como:

- a) utilizar as receitas derivadas da prestação do referido serviço para subvencionar a prestação de um serviço postal expresso ou de qualquer serviço postal não universal, e
- b) diferenciar entre clientes, tais como empresas, remetentes de grande volume ou consolidadores, com respeito às tarifas ou outros termos e condições para a prestação de um serviço sujeito a uma obrigação de serviço universal ou um monopólio postal, caso a mencionada diferenciação não esteja baseada em critérios objetivos ou imparciais.

ARTIGO 3º
SERVIÇOS POSTAIS UNIVERSAIS

Qualquer estado parte tem direito a definir o tipo de obrigação de serviço postal universal que deseja manter e pode adotar as medidas necessárias para salvaguardar a implementação, o desenvolvimento e a manutenção do serviço postal universal. Tais medidas e obrigações não serão consideradas anticompetitivas *per se*, desde que aplicadas de maneira transparente, não discriminatória e proporcional.

ARTIGO 4º
LICENÇAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POSTAIS

1. Os estados partes poderão requerer uma licença para a prestação de serviços postais. Essa licença será outorgada em conformidade com a legislação de cada estado parte, a qual procurará estabelecer um procedimento de autorização simples.
2. Uma licença poderá exigir o cumprimento dos requisitos essenciais, incluindo as normas de qualidade e o respeito dos direitos exclusivos e especiais dos operadores designados de serviços reservados ou dos serviços postais universais.
3. Quando uma licença for requerida para a prestação de serviços postais:
 - a) os estados partes deverão tornar públicos, de uma forma de fácil acesso:
 - i. os direitos e obrigações resultantes da referida licença;
 - ii. os critérios, termos e condições para a concessão de licenças; e

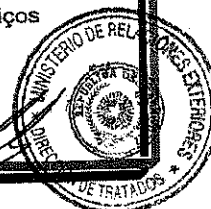


- iii. na medida do possível, o período de tempo normalmente necessário para tomar uma decisão relativa a uma solicitação de licença.
 - b) os procedimentos de concessão de uma licença deverão ser transparentes, não discriminatórios, proporcionais e baseados em critérios objetivos;
 - c) os custos nos quais possam incorrer os solicitantes por motivo de sua solicitação deverão ser razoáveis e não restringir por si mesmos a prestação do serviço.²
4. O estado de uma solicitação de licença e as razões de seu indeferimento deverão ser comunicados ao solicitante. O procedimento de apelação por meio de um organismo nacional independente deverá ser posto à disposição, conforme a regulação de cada estado parte. O referido procedimento deverá ser transparente, não discriminatório e baseado em critérios objetivos.

ARTIGO 5º INDEPENDÊNCIA DOS ORGANISMOS REGULADORES

Os estados partes poderão designar uma autoridade reguladora, seja ela específica para o setor ou não. O organismo ou os organismos reguladores de serviços postais devem estar legalmente separados dos prestadores de serviços postais e não terão que prestar contas perante nenhum prestador de serviços. As decisões e os procedimentos utilizados pelos organismos reguladores serão imparciais com respeito a todos os participantes no mercado.

² As taxas de concessão de licenças não incluem pagamentos por leilão, licitação ou outros meios não discriminatórios de concessão, nem contribuições obrigatórias à prestação de serviços universais.



ANEXO II

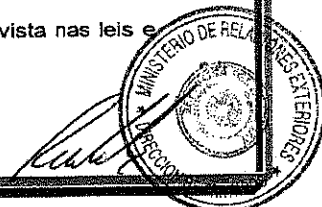
SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

ARTIGO 1º
ESCOPO E DEFINIÇÕES

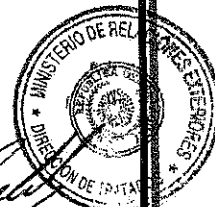
1. O presente Anexo se aplica a medidas dos estados partes que afetem o comércio de serviços de telecomunicações³. Não será aplicado às medidas de um estado parte que afetem o fornecimento de conteúdos transportados por telecomunicações, incluída a radiodifusão ou a distribuição por cabo de programas de rádio e televisão.⁴
2. Nada no disposto no presente Anexo será interpretado de modo a:
 - a) exigir de um estado parte que autorize um prestador de serviços de qualquer outro estado parte a estabelecer, construir, adquirir, arrendar, operar ou fornecer redes ou serviços de transporte de telecomunicações, exceto o disposto em sua Lista de Compromissos Específicos; ou
 - b) exigir de um estado parte que obrigue os prestadores de serviços sob suas leis e regulamentações nacionais a estabelecer, construir, adquirir, arrendar, operar ou fornecer redes ou serviços de transporte de telecomunicações não oferecidos ao público em geral.
3. Para os fins do presente Anexo, adotam-se as seguintes definições:
 - a) "telecomunicações": transmissão e recepção de sinais por qualquer meio eletromagnético;
 - b) "autoridade reguladora": organismo ou organismos encarregados de quaisquer das tarefas regulamentares designadas com relação às questões mencionadas no presente Anexo;
 - c) "prestador de serviços": pessoa a quem se outorgou uma licença para prestar serviços de telecomunicações;

³ Para os efeitos do presente Anexo, "comércio de serviços de telecomunicações" será entendido em conformidade com a definição contida no parágrafo 2) do artigo II do Protocolo de Montevideu sobre o Comércio de Serviços do MERCOSUL.

⁴ Para os efeitos do presente Anexo, "radiodifusão" será definida conforme está prevista nas leis e regulamentos nacionais de cada estado parte.



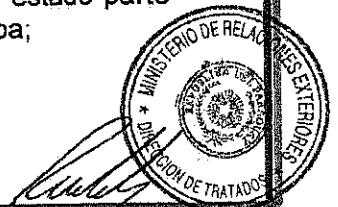
- d) "prestador com poder significativo de mercado": prestador de serviços que tem a capacidade de afetar materialmente as condições de participação com relação ao preço e à oferta nos mercados relevantes para as redes ou serviços públicos de telecomunicações, como resultado de sua posição no mercado;
- e) "rede pública de telecomunicações": infraestrutura de telecomunicações que permite a prestação do serviço público de telecomunicações entre pontos de terminação de rede definidos;
- f) "serviço público de telecomunicações": qualquer serviço de telecomunicações que um estado parte prescreva, explicitamente ou de fato, que se ofereça ao público em geral;
- g) "interconexão": conexão entre prestadores que fornecem redes ou serviços de telecomunicações de maneira a permitir que os usuários de um prestador se comuniquem com os usuários de outro prestador e tenham acesso aos serviços fornecidos por outro prestador;
- h) "licença": qualquer forma de autorização outorgada por uma autoridade reguladora, que seja necessária para a prestação do serviço de telecomunicações;
- i) "circuitos arrendados": instalações de telecomunicações entre dois ou mais pontos designados que se reservam para o uso ou para a disponibilidade específica a um cliente em particular ou outros usuários à escolha do cliente;
- j) "pontos de interconexão": pontos físicos localizados na fronteira de uma rede, onde se encontram os elementos de transmissão dos dois prestadores em uma interconexão, que permitem unir os dois nós de interconexão envolvidos. Esses pontos podem estar em qualquer lugar do caminho entre os dois nós e nesses pontos se estabelecem os limites da responsabilidade sobre meios físicos de cada um dos prestadores;
- k) "pontos de terminação de rede": demarcação final da rede pública de telecomunicações nas instalações dos prestadores de serviços;
- l) "não discriminatório": tratamento não menos favorável que o concedido a qualquer outro usuário ou prestador de redes ou serviços públicos de telecomunicações similares em circunstâncias similares;
- m) "portabilidade numérica": capacidade dos usuários de serviços públicos de telecomunicações para conservar, na mesma área de numeração, os mesmos números de telefone ao trocar entre a mesma categoria de prestadores de serviços públicos de telecomunicações;
- n) "pessoa": pessoa física ou jurídica.



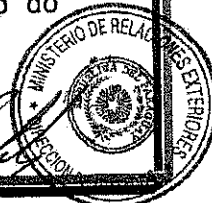
- o) "usuário": consumidor final ou assinante de serviços de telecomunicações.
- p) "serviço universal": serviço ou conjunto de serviços de telecomunicações que devem estar disponíveis para todos os usuários no território de um estado parte, em condições de qualidade especificadas, acessibilidade e a preços justos e razoáveis, independentemente de sua localização geográfica. Seu escopo e implementação serão decididos por cada estado parte.
- q) "facilidades essenciais": instalações de uma rede ou serviço público de telecomunicações que, de acordo com as respectivas normas nacionais, são:
 - i. fornecidas exclusiva ou predominantemente por apenas um ou por um número limitado de prestadores de serviços; e
 - ii. recursos de uma rede ou serviço de telecomunicações que não podem ser substituídos de maneira econômica ou tecnicamente possível para o fornecimento de um serviço.
- r) "comunicações intraempresariais": aquelas por meio das quais uma empresa se comunica dentro dela, ou com, ou entre suas subsidiárias, sucursais e filiais. Não incluem um serviço comercial ou não comercial que seja fornecido a uma empresa que não é uma subsidiária, sucursal ou filial, ou que oferece a um cliente ou cliente potencial. Para os efeitos desta definição, as "subsidiárias", as "sucursais" e, em seu caso, as "filiais" são as definidas por cada estado parte em suas leis nacionais.

ARTIGO 2º
ACESSO E USO DE REDES OU SERVIÇOS PÚBLICOS DE
TELECOMUNICAÇÕES

1. Cada estado parte assegurará, de acordo com suas normas internas, que a uma pessoa de outro estado parte lhe seja concedido o uso de redes ou serviços públicos de telecomunicações, incluídos os circuitos arrendados, oferecidos em seu território ou através de suas fronteiras, em termos e condições razoáveis e não discriminatórias.
2. Para isso, cada estado parte assegurará, em conformidade com os parágrafos 6 e 7, que uma pessoa de outro estado parte esteja autorizada a:
 - a) comprar, ou arrendar, e conectar terminais ou outros equipamentos que interajam com uma rede pública de telecomunicações;
 - b) conectar circuitos arrendados ou de sua propriedade com uma rede pública de telecomunicações ou serviço de telecomunicações desse estado parte ou com circuitos arrendados ou de propriedade de outra pessoa;



- c) utilizar um protocolo operacional de sua escolha entre os protocolos disponíveis.
3. Cada estado parte assegurará, em observância a seus regulamentos nacionais, que um usuário do outro estado parte possa utilizar uma rede ou serviço público de telecomunicações para o movimento de informação em seu território ou através de suas fronteiras, inclusive para as comunicações intraempresariais e para o acesso à informação contida em um banco de dados ou armazenada de outra maneira, de forma legível por máquina, no território de quaisquer dos estados partes.
4. Em conformidade com o artigo XIII "Exceções gerais" do Protocolo de Montevideu sobre o Comércio de Serviços do MERCOSUL, um estado parte poderá tomar as medidas necessárias para:
- a) garantir a segurança e a confidencialidade das mensagens; ou
 - b) proteger a privacidade dos dados pessoais dos usuários dos serviços públicos de telecomunicações.
5. Uma medida adotada em virtude do parágrafo 4 não poderá ser aplicada de maneira que constitua um meio de discriminação arbitrário ou injustificável ou uma restrição encoberta ao comércio.
6. Cada estado parte assegurará que não seja imposta nenhuma condição ao acesso e uso de uma rede ou serviço público de telecomunicações que não seja necessário para:
- a) salvaguardar as responsabilidades de serviço público dos prestadores de um serviço público de telecomunicações, particularmente sua capacidade para colocar seu serviço à disposição do público em geral;
 - b) proteger a integridade técnica de uma rede ou serviço público de telecomunicações.
7. Sempre que cumpridos os critérios estabelecidos no parágrafo 6, as condições de acesso e uso de uma rede ou serviço público de telecomunicações poderão incluir:
- a) uma restrição à revenda ou ao uso compartilhado desse serviço;
 - b) requisitos para utilizar uma interface técnica especificada, incluindo um protocolo de interface, para a conexão com essa rede ou serviço;
 - c) um requisito, caso necessário, para a interoperabilidade desse serviço;
 - d) a avaliação da conformidade do terminal ou outro equipamento que interaja com a rede e os requisitos técnicos relativos à conexão do referido equipamento à rede;



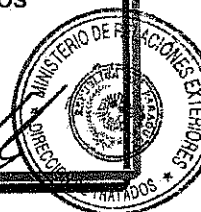
- e) uma restrição à conexão de circuitos próprios ou arrendados com essa rede ou serviço ou de circuitos próprios ou arrendados com outra empresa; e
- f) notificação, registro e concessão de licenças.

ARTIGO 3º SALVAGUARDAS CONCORRENCIAIS

1. Cada estado parte deverá manter as medidas apropriadas com a finalidade de impedir que os prestadores, individualmente ou em conjunto, participem ou mantenham práticas anticoncorrenciais.
2. As práticas anticoncorrenciais às quais se refere o parágrafo 1 incluirão, particularmente:
 - a) realizar atividades anticoncorrenciais de subsídios cruzados;
 - b) utilizar informação obtida de concorrentes com resultados anticoncorrenciais; e
 - c) não colocar oportunamente à disposição dos demais prestadores de serviços a informação técnica sobre as facilidades essenciais e a informação comercialmente pertinente de que necessitam para prestar serviços.

ARTIGO 4º INTERCONEXÃO

1. Este artigo se aplica à vinculação com prestadores que proporcionam redes ou serviços públicos de telecomunicações para permitir que os usuários de um prestador se comuniquem com os usuários de outro prestador e tenham acesso aos serviços prestados por outro prestador, quando forem assumidos compromissos específicos.
2. Todo prestador autorizado a prestar serviços de telecomunicações terá direito a negociar a interconexão com outros prestadores de redes e serviços de telecomunicações. A princípio, a interconexão deveria ser acordada com base em negociação comercial entre os prestadores interessados.
3. Quando a regulamentação nacional exigir que os prestadores se interconectem, a referida interconexão será proporcionada de maneira oportuna, em termos e condições (incluídas as normas e especificações técnicas) que sejam transparentes, razoáveis, levando em conta a viabilidade econômica, e suficientemente detalhada e desagregada para que o prestador não tenha que pagar por componentes ou instalações da rede não necessários para os serviços a serem prestados.



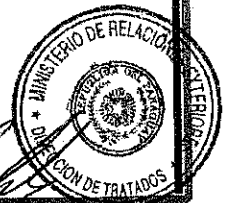
4. A referida interconexão será proporcionada em pontos tecnicamente viáveis, além dos pontos de interconexão oferecidos à maioria dos ofertantes, sujeito a tarifas razoáveis e a uma avaliação por parte da autoridade reguladora, quando pertinente.
5. Cada estado parte assegurará que todo prestador que, de acordo com a regulamentação nacional esteja obrigado a proporcionar interconexão, torne públicos os procedimentos aplicáveis para as negociações de interconexão.

ARTIGO 5º
SERVIÇO UNIVERSAL

1. Cada estado parte tem direito a definir a obrigação de serviço universal que deseja adotar ou manter.
2. Cada estado parte deverá administrar qualquer obrigação de serviço universal que adotar ou mantiver de maneira transparente, objetiva, não discriminatória e concorrentemente neutra.

ARTIGO 6º
LICENÇAS PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES

1. A licença será concedida, sempre que possível, mediante procedimento simplificado.
2. Os termos e condições para a designação de números e frequências deverão estar publicamente disponíveis.
3. Quando se requeira uma licença:
 - a) todos os critérios de outorga deverão estar publicamente disponíveis;
 - b) deverá ser colocado à disposição do público o prazo razoável que normalmente se requer para tomar uma decisão sobre a solicitação após a apresentação de uma solicitação completa;
 - c) as razões do indeferimento deverão ser comunicadas por escrito ao solicitante que assim o requerer;
 - d) o solicitante deverá poder recorrer a um órgão nacional de apelação caso uma licença lhe tenha sido indeferida.



ARTIGO 7º
AUTORIDADE REGULADORA

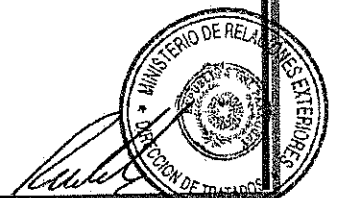
1. A autoridade reguladora para os serviços de telecomunicações de cada estado parte deverá ser independente e não deverá prestar contas a qualquer prestador de serviços de telecomunicações.
2. Cada estado parte assegurará que as decisões e os procedimentos utilizados por sua autoridade reguladora sejam imparciais com respeito a todos os participantes no mercado.
3. Cada estado parte assegurará que os prestadores de serviços de outro estado parte afetados por uma determinação ou decisão da autoridade reguladora possam solicitar a essa autoridade que reconsidere essa determinação ou decisão. Um estado parte poderá limitar as circunstâncias sob as quais a reconsideração está disponível, de acordo com suas leis e regulamentações.
4. Cada estado parte assegurará que os prestadores de serviços de outro estado parte afetados por uma decisão da autoridade reguladora do estado parte tenham o recurso de apelar junto a um órgão administrativo independente ou um tribunal, em conformidade com as leis e regulamentos nacionais desse estado parte.

ARTIGO 8º
OBSERVÂNCIA

Cada estado parte deverá manter os procedimentos adequados e a autoridade para fazer cumprir suas medidas internas com relação às obrigações do presente Anexo. Os referidos procedimentos incluirão a possibilidade de impor sanções apropriadas, as quais poderiam ser, entre outras, sanções financeiras, ações corretivas, ou a modificação, suspensão ou revogação de licenças.

ARTIGO 9º
RECURSOS ESCASSOS

Cada estado parte deverá realizar seus procedimentos para outorgar direitos de uso de recursos escassos, incluindo frequências, números e direito de passagem, de maneira objetiva, oportuna, transparente e não discriminatória. Cada estado parte deverá colocar à disposição do público o estado atual das faixas de frequência designadas, embora não se requeira uma identificação detalhada das frequências para usos governamentais específicos.



ARTIGO 10
ACESSO ÀS FACILIDADES ESSENCIAIS

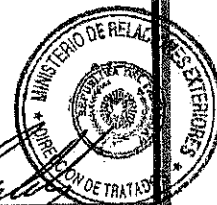
Cada estado parte deverá garantir que os prestadores com poder significativo de mercado em seu território outorguem acesso às facilidades essenciais a outros prestadores de serviços ou redes de telecomunicações, em termos e condições razoáveis e não discriminatórios (inclusive com relação às tarifas, normas técnicas, especificações, qualidade e manutenção).

ARTIGO 11
PORTABILIDADE NUMÉRICA

Cada estado parte assegurará que os prestadores de serviços públicos de telecomunicações em seu território proporcionem portabilidade numérica, sem prejuízo da qualidade e da confiabilidade, de maneira oportuna, baseada em termos e condições razoáveis e não discriminatórios, para aqueles serviços públicos de telecomunicações nos quais sua regulamentação interna o estabeleça.

ARTIGO 12
SOLUÇÃO DE CONTROVÉRSIAS

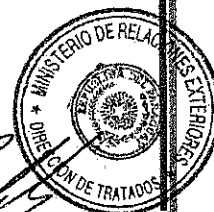
1. Cada estado parte assegurará que um prestador de serviços tenha a possibilidade de recorrer oportunamente à sua autoridade reguladora para resolver, em um período de tempo razoável, controvérsias que digam respeito a uma medida que se relacione com as questões previstas no presente Anexo e que, conforme a legislação nacional do estado parte, estejam na esfera de jurisdição da autoridade reguladora.
2. Quando a controvérsia se referir a uma negociação de um acordo de interconexão, cada estado parte assegurará que os prestadores tenham a possibilidade de recorrer à autoridade reguladora para resolver os termos, condições e tarifas apropriadas para a interconexão, em um período de tempo razoável. A autoridade reguladora poderá recorrer a procedimentos especiais de conciliação.
3. Se a controvérsia persistir, a autoridade reguladora deverá estabelecer as condições para a interconexão, em conformidade com os princípios que regem o setor do qual se tratar, bem como os estabelecidos no presente Anexo.
4. Quando uma disputa se referir à prestação transfronteiriça de serviços, as autoridades reguladoras nacionais interessadas deverão coordenar esforços para alcançar sua solução.



ARTIGO 13 TRANSPARÊNCIA

Adicionalmente ao disposto no artigo VIII "Transparência" do Protocolo de Montevideu sobre o Comércio de Serviços do MERCOSUL e em complemento às demais disposições do presente Anexo, relativas à publicação de informação, cada estado parte deverá colocar à disposição do público:

- a) o estado atual das faixas de frequência designadas. Não se requer uma identificação detalhada das frequências designadas para uso governamental específico;
- b) suas medidas relativas às redes ou serviços públicos de telecomunicações, incluídos:
 - i. os procedimentos pertinentes de sua autoridade reguladora, incluídos os relacionados com a interconexão e a concessão de licenças;
 - ii. os critérios de licenças, seus termos e condições e o período normalmente necessário para chegar à decisão sobre uma solicitação a esse respeito;
 - iii. medidas relativas às tarifas e outros termos e condições de serviço;
 - iv. medidas relativas às condições de conexão de terminais ou outros equipamentos à rede pública de telecomunicações;
 - v. medidas relativas aos requisitos de notificação, autorização, registro ou licença.



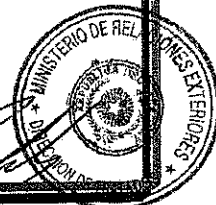
ANEXO III
REGULAMENTAÇÃO DOMÉSTICA

ARTIGO 1º
ALCANCE DE APLICAÇÃO

1. O presente Anexo se aplica somente aos setores nos quais um estado parte tiver assumido compromissos específicos, em conformidade com o artigo VII do Protocolo de Montevideu sobre o Comércio de Serviços do MERCOSUL, e na medida na qual sejam aplicados esses compromissos específicos.
2. Os estados partes reconhecem o direito de regular e introduzir novas regulamentações sobre a prestação de serviços dentro de seus respectivos territórios, a fim de cumprir seus objetivos de política nacional.
3. Cada estado parte assegurará que todas as medidas de aplicação geral que afetem o comércio de serviços sejam administradas de maneira razoável, objetiva e imparcial.

ARTIGO 2º
DESENVOLVIMENTO DE REQUISITOS E PROCEDIMENTOS DE CONCESSÃO DE LICENÇAS E QUALIFICAÇÃO

1. Quando um estado parte adotar ou mantiver uma medida relacionada com os requisitos e procedimentos de concessão de licenças ou os requisitos e procedimentos de qualificação, relacionados com o comércio de serviços, o estado parte, com respeito a essa medida, assegurará que:
 - a) os requisitos ou procedimentos se baseiem em critérios que sejam:
 - i. objetivos e transparentes, como competência e capacidade de prestar um serviço;
 - ii. estabelecidos com antecedência e de acesso público.
 - b) os procedimentos sejam razoáveis, simples e que não constituam por si mesmos uma restrição indevida ao cumprimento de um requisito; e
 - c) os procedimentos em matéria de licenças não constituam por si mesmos uma restrição à prestação do serviço.
2. Quando um estado parte adotar ou propuser regulamentos relacionados com os requisitos de licença, com os requisitos de qualificação, com os procedimentos de licença ou os procedimentos de qualificação, deverá procurar, na medida do factível e de maneira compatível com as leis e os regulamentos nacionais dos estados partes, realizar uma avaliação de impacto regulatório.

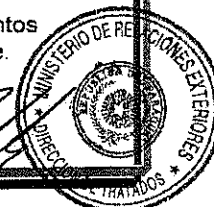


ARTIGO 3°
ADMINISTRAÇÃO DOS REQUISITOS E PROCEDIMENTOS DE CONCESSÃO DE LICENÇAS E QUALIFICAÇÃO

1. Cada estado parte assegurará que os procedimentos de concessão de licenças ou procedimentos de qualificação utilizados pela autoridade competente e as decisões da autoridade competente no processo de autorização sejam imparciais com respeito a todos os solicitantes. A autoridade competente deve tomar suas decisões de maneira independente e, em particular, não deverá responder aos interesses de nenhuma pessoa que prestar o serviço.
2. Na medida em que seja factível, cada estado parte deverá evitar que um solicitante se dirija a mais de uma autoridade competente para cada solicitação de autorização⁵.
3. Quando for requerida autorização para a prestação de um serviço, as autoridades competentes de um estado parte devem:
 - a) na medida em que seja factível, permitir que o solicitante apresente uma solicitação a qualquer momento⁶;
 - b) permitir um prazo prudencial para a apresentação de uma solicitação quando existirem prazos específicos para as solicitações;
 - c) iniciar o processamento de uma solicitação sem demora indevida;
 - d) garantir que a tramitação de uma solicitação de autorização, incluindo uma decisão definitiva, seja concluída em um prazo razoável a partir da apresentação de uma solicitação completa;
 - e) mediante pedido de um solicitante, proporcionar informação sobre o estado da solicitação o mais brevemente possível;
 - f) quando forem requeridas provas, programá-las em intervalos razoavelmente frequentes e proporcionar um prazo prudencial para os interessados em realizar a prova;
 - g) na medida do possível, aceitar solicitações em formato eletrônico em condições similares de autenticidade que as apresentadas em papel;
 - h) aceitar cópias autenticadas no lugar de documentos originais, a menos que sejam requeridos documentos originais para proteger a integridade do processo de autorização;

⁵ Para maior certeza, um estado parte pode requerer múltiplas solicitações de autorização quando um serviço está dentro da jurisdição de múltiplas autoridades competentes.

⁶ No caso dos serviços profissionais, os estados partes assegurarão que existam procedimentos estabelecidos em nível nacional para avaliar a competência dos profissionais do outro estado parte.

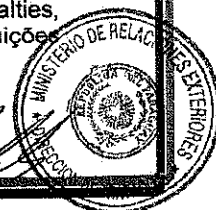


- i) garantir que as taxas de autorização⁷ cobradas pela autoridade competente cumprem com cada um dos seguintes critérios:
- i. sejam razoáveis e, na medida do possível, proporcionais ao custo dos procedimentos de autorização de que tratam;
 - ii. sejam transparentes; e
 - iii. não restrinjam, por si mesmas, a prestação de um serviço.
4. Cada estado parte deverá assegurar que uma autorização seja concedida tão logo a autoridade competente determinar que foram cumpridas suas condições e, uma vez concedida, que a autorização entre em vigor sem demora indevida, em conformidade com os termos e condições nela especificados.
5. Se uma solicitação for considerada incompleta, a autoridade competente de um estado parte deverá informar ao solicitante dentro de um prazo razoável e, a seu pedido, deverá identificar a informação adicional necessária para completar a solicitação. A autoridade competente deverá oferecer ao solicitante a oportunidade de corrigir as deficiências.
6. Se a autoridade competente de um estado parte rejeitar uma solicitação, deverá informar ao solicitante, na medida do possível, dentro de um prazo razoável. A pedido do solicitante, a autoridade competente do estado parte deverá informar também, na medida do factível, as razões pelas quais se rejeitou a solicitação e o prazo para apresentação de recurso ou revisão contra essa decisão. Deve-se permitir que um solicitante, dentro de prazos razoáveis, volte a apresentar uma solicitação.

ARTIGO 4º REVISÃO DAS DECISÕES ADMINISTRATIVAS

Cada estado parte deverá manter ou estabelecer tribunais ou procedimentos judiciais, arbitrais ou administrativos que proporcionem, mediante solicitação de um prestador de serviços de um estado parte, a pronta revisão das decisões administrativas que afetam o comércio de serviços e, quando for justificado, a aplicação de soluções apropriadas. Quando tais procedimentos não forem independentes do organismo encarregado da decisão administrativa em questão, cada estado parte deverá assegurar que os procedimentos permitam uma revisão objetiva e imparcial.

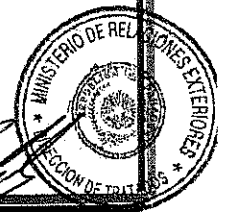
⁷ As taxas de autorização não incluem pagamentos por leilão, uso de recursos naturais, royalties, licitações ou outros meios não discriminatórios para outorgar concessões ou contribuições obrigatórias para oferecer um serviço universal.



**ARTIGO 5º
TRANSPARÊNCIA**

Quando um estado parte exigir autorização para a prestação de um serviço, deverá proporcionar a informação necessária para cumprir com os requisitos e procedimentos para obter, manter, modificar e renovar a referida autorização. A mencionada informação deverá incluir, entre outros, os seguintes itens, quando existirem:

- a) taxas;
- b) dados de contato das autoridades competentes pertinentes;
- c) procedimentos de apelação ou revisão das decisões relativas às solicitações;
- d) procedimentos para monitorar ou fazer cumprir os termos e condições das licenças ou qualificação;
- e) oportunidades de participação do público, por exemplo, por meio de audiências ou comentários;
- f) prazos indicativos para a tramitação de uma solicitação; e
- g) requisitos e procedimentos.





República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número:

Referencia: "Enmienda al Protocolo de Montevideo sobre el Comercio de Servicios del MERCOSUR"

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 36 pagina/s.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica
Date: 2022.11.11 17:50:57 -03:00

Digitally signed by Gestion Documental
Electronica
Date: 2022.11.11 17:50:57 -03:00